

## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Proyectamos dejar sin efecto el decreto del Poder Ejecutivo 2.104/93 publicado en el Boletín Oficial el 20 de octubre de 1993 por haberse excedido en sus facultades constitucionales.

Con ello subrayamos la necesidad de refirmar la seguridad jurídica en la República.

El decreto pretende la creación de un "régimen de facilidades de pago" para los contribuyentes clasificados como autónomos (ley 18.038) basándose en supuestas delegaciones contenidas en la ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) y en el decreto de "necesidad y urgencia" 507 del 24 de marzo de 1993.

El decreto 507/93, que el Honorable Congreso de la Nación no ratificó, intenta unificar la recaudación previsional y la impositiva a partir del 1º de abril de 1993 asignando facultades a la Dirección General Impositiva para todo lo relativo a la aplicación, recaudación y fiscalización de los recursos de seguridad social.

Pero ello no significa que el Poder Ejecutivo pueda legislar modificando con dicho decreto normas de la ley 18.038. Por otra parte los graves errores del decreto han sido subrayados como, que en lugar de representar un régimen de facilidades para el pago de una deuda, es una penalización.

La doctrina es unánime en destacar su falta de equidad, abuso en la categorización, excesivo costo, e incluso imposibilidad de pago.

En distintos análisis publicados en "Ambito Financiero" han coincidido en términos generales, Daniel Pérez (6-12-1993); Héctor Moncayo (7-12-1993); Juan Aleman (29-12-1993); diputado Eduardo Santín (29-12-1993); Carlos Seisdedos (30-12-1993); Carlos Datillo (5-1-1994); Salvador Treber (10-1-1994) y en el "Cronista" del (13-1-1994) Roberto Ricardo Serra.

Diversas entidades profesionales señalan a su vez que la norma que crea obligaciones a partir de la fecha de matriculación y que no se basa en reales ingresos, no tiene sustento legal.

Nos remitimos a las publicaciones efectuadas por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos.

Los productores del agro a través de sus entidades representativas, Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación

Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), etcétera, coinciden cuestionando el régimen del decreto 2.104 agregándose a los reclamos del comercio y servicios, Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias (CAME); Confederación de Comercio y Servicios (CGS y S) de la República Argentina; Federación del Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, etcétera.

Siendo unánime el cuestionamiento, proyectamos dejar sin efecto el régimen del decreto 2.104/93 sustituyéndolo por un sistema que asegure la equidad en la solución de la deuda de los trabajadores independientes como se hizo oportunamente con los dependientes.

Como antecedente debemos citar la ley 24.013 (B.O. 17-1-91) que dispuso el registro espontáneo de trabajadores (título 11) sin costo, habiendo sido reglamentado por el decreto 2.725 y complementado por la ley 24.073 en lo relacionado con la tributación.

Nuestro proyecto se encamina a superar la etapa anterior que ha creado deudas incobrables, y solucionar en forma aceptable el problema.

Debe recordarse que en iguales circunstancias se ha adoptado un régimen de cuotas, intereses, plazos, en cuadro que es más accesible respecto del dispuesto por el decreto 2.104/93.

Para mantener la igualdad, nuestra propuesta sigue el criterio de lo dispuesto por la Ley de Empleo (24.013) y condona toda deuda previsional de los trabajadores independientes a la misma fecha que los trabajadores en relación de dependencia.

La operatoria del proyecto es similar a la adoptada por la regularización previsional dispuesta por el decreto 933/93, cuya legitimidad no analizamos ahora, es decir que la deuda consolidada se abonará en cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un interés del 1 % mensual sobre saldos.

Para la determinación de la deuda, en el proyecto se fija una tasa reducida de interés (0,5 %) cumpliendo con el propósito de facilitar la incorporación a la legalidad de los deudores.

Mediante este proyecto se concretará la regularización de los trabajadores autónomos con normas similares a las utilizadas para los trabajadores en relación de dependencia, y que estén al alcance de todos por ser de sencilla aplicación lo que redundará en una mejor recaudación.

Por todo ello, pedimos a la Honorable Cámara preste su conformidad a esta iniciativa.

*José G. Dumón. — Leopoldo R. G. Moreau. — Alejandro Armendáriz. — Eduardo Santín. — Gastón H. Ortiz Maldonado.*

—A la Comisión de Previsión y Seguridad Social.